



Rama Judicial

República de Colombia

JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

Ibagué, diez (10) de febrero de dos mil veinte (2020).

Asunto: ACCIÓN DE TUTELA
Accionante: MANUEL EDUARDO PEREZ BARRAGAN
Accionado: JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Expediente 73001-33-33-003-2020-00023-00

ASUNTO

Procede el Juzgado a proferir sentencia dentro de la acción de tutela instaurada por el señor Manuel Eduardo Pérez Barragán, contra la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores.

I. ANTECEDENTES

1. DEMANDA

1.1. Elementos y pretensión

a. *Derechos fundamentales invocados: debido proceso.*

b. *Pretensiones:*

- Solicita el accionante la protección de los derechos enunciados y se puede inferir de su demanda, que demanda información sobre el estado de la investigación disciplinaria iniciada con ocasión a una queja presentada por el mismo petente.

1.2. Fundamentos de la pretensión

De lo expuesto en la tutela, se pueden extraer como hechos relevantes los siguientes:

- Que el día 28 de junio de 2019, el accionante presentó denuncia ante la Junta Central de Contadores a través de la página oficial, en la cual solicitó que se iniciara una investigación en contra de los señores Óscar Javier Bonilla y Judy Milena Pineda, contadores públicos, afirmando que se habían presentado irregularidades en su proceder profesional¹.
- Que la entidad accionada le contestó, solicitándole la ratificación de los hechos bajo juramento, esto con el radicado asignado N° 37628.19², lo que procedió a hacer el accionante, quien envió ratificación y juramento el día 19 de julio de 2019 por correo certificado de la empresa Servientrega³.
- Que para el mes de septiembre y siguiendo lo indicado por la Junta Central de Contadores, el accionante solicitó a través de la página y vía telefónica,

¹ Ver en folios 13-22.

² Ver en folio 10.

³ Ver en folios 4-7.

información sobre el estado de la investigación, pues según lo informado por la entidad, se podía consultar acerca de la apertura de la misma en un término de tres meses, sin embargo no le han dado ninguna respuesta.

2. ACTUACIÓN JUDICIAL

La acción fue presentada ante la Oficina Judicial el 27 de enero de la presente anualidad, correspondiendo a este Despacho Judicial por reparto, como obra a folio 1 del expediente. Una vez recibidas las presentes diligencias, mediante providencia 28 del mismo mes y año (*folio 24*) fue admitida y se requirió a la entidad accionada para que en el término improrrogable de dos (2) días informara sobre los motivos que generaron la actuación.

3. RESPUESTA DE LA ACCIONADA

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES ⁴

El representante legal de la Unidad Administrativa Especial - Junta Central de Contadores, José Orlando Ramírez Zuluaga, rindió informe en el cual indicó al Despacho que efectivamente recibieron una petición del accionante el día 2 de julio de 2019, la cual consistía en una queja disciplinaria en contra de dos contadores públicos, señores Oscar Bonilla y Judy Murcia; indicó también que luego el accionante ratificó su queja mediante el juramento ante la entidad en el memorial aportado el 22 de julio de 2019.

Sobre lo que es objeto de pretensión, advirtió la entidad accionada a través de su representante legal, que no es cierto que el accionante haya realizado petición "*formal o escrita*" para conocer el estado de la investigación disciplinaria, sino que, se encuentran registradas dos llamadas consultando el estado de la queja interpuesta, estas realizadas los días 16 y 23 de agosto de 2019, en las cuales se le informó que "*por motivos de reserva legal del expediente, no se podía brindar información, y debía radicar petición por la página web.*", esto dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 734 de 2002 artículo 95.

En cuanto a la solicitud realizada vía telefónica, el representante indicó que en la página [https://jcc.gov.co/imagenes/pdfs/actas-del-tribunal-ACTA 2094 DE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019.pdf](https://jcc.gov.co/imagenes/pdfs/actas-del-tribunal-ACTA%202094%20DE%2005%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf), se encontraban publicadas las actas del Tribunal Disciplinario, allí el accionante pudo consultar el estado de su queja y revisar la sesión 2094 del 5 de septiembre⁵ mediante la cual se emitió el "auto inhibitorio por la causal de caducidad de la acción disciplinaria...", además de esto, el representante de la accionada advirtió al despacho que tal decisión le fue informada al correo electrónico contadorestorrado@hotmail.com el día 29 de enero de 2020⁶, en virtud de serles notificada esta tutela.

Conforme a lo anterior, solicitó que se declare improcedente la presente acción, porque no se ha vulnerado ningún derecho al accionante y al contrario, la entidad le brindó los mecanismos administrativos pertinentes.

⁴ Ver en folios 28-33.

⁵ Ver en folios 31-32

⁶ Ver en folio 33.

Asunto: ACCIÓN DE TUTELA
Accionante: MANUEL EDUARDO PEREZ BARRAGAN
Accionado: JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Expediente 73001-33-33-003-2020-00023-00

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Es competente este Despacho Judicial para conocer de la presente acción de tutela de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

2. PROBLEMA JURÍDICO

A pesar de que se refiere el accionante al derecho al debido proceso, su solicitud de amparo va encaminada es a la protección del derecho de petición, que igualmente tiene relación con el primero de los mencionados.

Por lo anterior, el problema se centrará en determinar si se ha configurado un hecho superado en relación con las pretensiones de la tutela, en virtud de la respuesta que se dio durante el curso del proceso.

3. LA ACCIÓN DE TUTELA

La acción de tutela, instituida en nuestra Constitución Política en su artículo 86, tiene como finalidad facilitar a las personas un mecanismo ágil, breve y sumario a fin de hacer respetar los derechos fundamentales constitucionales, cuando quiera que ellos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en determinados casos, siempre que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, sin que ello implique una instancia adicional a los procedimientos establecidos en las normas procesales pertinentes, figura regulada mediante los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1069 y 1834 de 2015.

Dicha acción es un medio procesal específico que se contrae a la protección inmediata de los derechos fundamentales constitucionales afectados de manera actual e inminente, siempre que éstos se encuentren en cabeza de una persona o grupo determinado de personas, y conduce, previa solicitud, a la expedición de una declaración judicial que contenga una o varias órdenes de efectivo e inmediato cumplimiento, encaminadas a garantizar su protección.

Señalase que su consagración constitucional se dirige a establecer un procedimiento, o eventualmente, un conjunto de procedimientos judiciales autónomos, específicos y directos, de garantía inmediata de protección de los derechos considerados como fundamentales, cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la concreta acción o la omisión de una autoridad pública o por un particular en los términos señalados por la ley.

4. REFERENTES NORMATIVOS Y JURISPRUDENCIALES

Frente a los derechos considerados como vulnerados por el accionante, el Despacho considera pertinente hacer las siguientes precisiones:

4.1. Derecho fundamental de petición

El derecho de petición está consagrado en el artículo 23 de la Carta Política como un derecho fundamental y al mismo tiempo dispuso su aplicación inmediata en el artículo 85⁷.

De otro lado, reiteradamente la Corte Constitucional ha definido los componentes conceptuales básicos y mínimos del derecho de petición, señalando que dicho derecho fundamental comprende la posibilidad efectiva y cierta de elevar peticiones respetuosas ante los diferentes entes del poder público, facultad que está garantizada por la correlativa obligación impuesta a las autoridades de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento alguno para negar su admisión o iniciar las diligencias para dar la respuesta⁸.

Por ende, el destinatario de la petición debe: **a-** Proferir una respuesta oportuna, dentro de los términos legales establecidos en el ordenamiento jurídico. **b-** Resolver de fondo lo solicitado, cuestión que exige a la autoridad referirse de manera completa a los asuntos planteados, excluyendo de plano las respuestas evasivas y **c-** Comunicar prontamente lo decidido al peticionario, independientemente de que la respuesta sea positiva o negativa a sus pretensiones.

Los anteriores criterios tienen como fundamento los principios de suficiencia, congruencia y efectividad del derecho de petición. Así lo señaló la Corte Constitucional:

“Una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario⁹; es efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea¹⁰ (artículos 2, 86 y 209 de la C.P.); y es congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución a lo pedido verse sobre lo preguntado y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre relacionada con la petición propuesta¹¹”¹².

Corolario de lo enunciado, dicha Corporación ha reiterado el sentido y alcance del derecho de petición, así como sus elementos característicos, de esta forma la Sentencia T-1160A de 2001 señaló:

“...a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.”

“b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.”

“c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos

⁷ El artículo 85 de la Constitución Política determina: “Son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37 y 40”.

⁸ Sentencias T – 944 de 199 y T – 259 de 2004.

⁹ Sentencias T-1160A/01, T-581/03.

¹⁰ Sentencia T-220/94.

¹¹ Sentencia T-669/03.

¹² Sentencia T – 259 de 2004.

Asunto: ACCIÓN DE TUTELA
Accionante: MANUEL EDUARDO PEREZ BARRAGAN
Accionado: JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Expediente: 73001-33-33-003-2020-00023-00

se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

“d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.”

(...)

“h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición.”

“i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994.”⁴

“En la sentencia T-1006 de 2001, la Corte adicionó dos reglas jurisprudenciales más:

“j) “La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del deber de responder”;⁵

“k) “Ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado”.⁶...” **Negrillas y subrayas por fuera del texto.**

La Corte Constitucional ha tratado el tema en múltiples ocasiones, para decir que el núcleo esencial del derecho de petición es la resolución pronta, congruente y oportuna de lo solicitado, porque carecería de sentido dirigirse a las autoridades si éstas no deciden o, habiendo adoptado la determinación correspondiente, se abstienen de comunicarla al interesado; dicha respuesta ha dicho la Corte, no implica aceptación de lo solicitado.

Sobre esto último, ha destacado en sus decisiones que la satisfacción del derecho de petición no depende, en ninguna circunstancia, de la respuesta favorable a lo solicitado, por lo que se considera que hay contestación, incluso si la respuesta es en sentido negativo y se explican los motivos que conducen a ello¹³. Precisamente la Corte Constitucional distingue y diferencia el derecho de petición del “*el derecho a lo pedido*”¹⁴, que se emplea con el fin de destacar que “*el ámbito de protección constitucional de la petición se circunscribe al derecho a la solicitud y a tener una contestación para la misma, [y] en ningún caso implica otorgar la materia de la solicitud como tal.*”¹⁵

Por regla general, el término que tiene la administración para resolver las peticiones, es el de quince (15) días previsto en inciso 1º del artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 que sustituyó lo regulado en la Ley 1437 de 2011, “*Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo*”¹⁶, y cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en dicho plazo, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el

¹³ Sentencia T-044 de 2019 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado

¹⁴ Sentencias T-242 de 1993 M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-510 de 2004 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-867 de 2013 M.P. Alberto Rojas Ríos; C-951 de 2014 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez; y T-058 de 2018 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo

¹⁵ Sentencia C-007 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado

¹⁶ El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo comenzó a regir el dos (2) de julio del año 2012 y señala en su artículo 14: “ARTICULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. (...)”.

plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

4.2. De la carencia actual de objeto por hecho superado

La Honorable Corte Constitucional, en reiteradas oportunidades ha señalado que la carencia actual de objeto, se presenta en aquellos casos en que tiene lugar un daño consumado o un hecho superado, lo que torna inane cualquier orden del Juez de tutela en relación, pues no tendría efecto alguno.¹⁷

Respecto a la figura del hecho superado, advierte la Corte, *tiene ocurrencia cuando lo pretendido a través de la acción de tutela se satisface y desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados por el demandante, de suerte que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua y, por lo tanto, contraria al objetivo de protección previsto para el amparo constitucional*¹⁸.

A efectos de establecer si se ha configurado o no un hecho superado, en la Sentencia T-045 de 2008¹⁹, se establecieron los siguientes criterios para determinar si, en un caso concreto, se está o no en presencia de un hecho superado, a saber:

“1. Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se carezca de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental del accionante o de aquél en cuyo favor se actúa.

2. Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la acción que generó la vulneración o amenaza haya cesado.

3. Si lo que se pretende por medio de la acción de tutela es el suministro de una prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se puede considerar que existe un hecho superado.”

5. CASO CONCRETO

El señor Manuel Eduardo Pérez Barragán presentó acción de tutela, con el fin de que se proteja su derecho fundamental de petición, al considerar que la Junta Central de Contadores no había dado respuesta a una solicitud con la que busca información acerca del estado de la investigación a la que le dio origen una queja interpuesta por él en contra de los señores Óscar Javier Bonilla y Judy Milena Pineda, por presuntas irregularidades en su proceder profesional y que remitió ante la entidad accionada a través su página oficial.

Por su parte, la Junta Central de Contadores al contestar la tutela advierte que en efecto el accionante presentó la queja en cuestión y procedió a ratificarla como se le exigió. Sin embargo, considera que no hay vulneración de derecho fundamental alguno, porque desde antes de instaurarse la tutela, se procedió por parte del Tribunal Disciplinario de la entidad a proferir el auto inhibitorio frente a la queja presentada, decisión adoptada en sesión No. 2094 del 5 de septiembre de 2019 y que podía ser consultada por el accionante en la página web de la entidad.

¹⁷ Entre muchas otras, se puede consultar la sentencia T-085 de 2018, M.P. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ.

¹⁸ Sentencia T-678 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, en donde se cita la Sentencia SU-540 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

¹⁹ M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

Asunto: ACCIÓN DE TUTELA
Accionante: MANUEL EDUARDO PEREZ BARRAGAN
Accionado: JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Expediente 73001-33-33-003-2020-00023-00

Al respecto debe precisar el Juzgado que como quejoso, el accionante tiene derecho a conocer las decisiones de mérito que se adopten al interior del trámite disciplinario que se promovió a instancia suya, de tal suerte que la mera posibilidad de consultar en bases de datos las decisiones que se adopten, no es suficiente para entender materializado ese derecho de acceso a la información.

Sin embargo, como la decisión inhibitoria le fue comunicada al actor al correo electrónico contadorestorrado@hotmail.com el día 29 de enero del año presente²⁰, se evidencia que se resolvió de fondo, de manera clara y congruente lo solicitado, de tal forma que la pretensión ha sido satisfecha al darse a conocer al actor el estado actual del trámite disciplinario que promovió y es por ello que se configura el fenómeno de la carencia actual del objeto por hecho superado que se declarará.

En mérito de lo expuesto, el **Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué - Tolima**, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado dentro de la presente acción de tutela, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz en los términos indicados en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Una vez notificado el presente fallo y, de no ser impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, envíese el expediente a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,


DIANA CAROLINA MÉNDEZ BERNAL
Jureza

²⁰ Folio 33

